



Rama Judicial
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
República de Colombia

Santiago de Cali, tres (03) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

Auto Interlocutorio No. 139

MAGISTRADO PONENTE: VÍCTOR ADOLFO HERNÁNDEZ DÍAZ

MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
EXPEDIENTE:	76001-33-33-008-2017-00329-01
DEMANDANTE:	NOHORA BARRERA MORALES alfortiz@cable.net.co
DEMANDADO:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES – UGPP notificacionesjudicialesugpp@ugpp.gov.co vhbhprocesoscali@gmail.com
ASUNTO	APELACIÓN DE AUTO NIEGA SOLICITUD LLAMAMIENTO EN GARANTIA - CONFIRMA

I. OBJETO DE LA DECISION

La Sala, en aplicación de lo preceptuado en el literal (g) del numeral 1o del artículo 125 de la Ley 1437 de 2011, (modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021), decide el recurso apelación, propuesto por la parte demandada, contra el auto interlocutorio No. 532 del 15 de julio de 2019¹, proferido por el Juzgado 8 Administrativo Oral del Circuito de Cali, que negó la solicitud de llamamiento en garantía formulada por la parte demandada en contra de Ministerio de Transporte – Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil de Colombia.

II. ANTECEDENTES

En ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 138 del CPACA y actuando a través de apoderado judicial, la señora Nohra Barrera Morales demandó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP, a fin de que se declare² la nulidad parcial de las Resoluciones nro. RDP035729 del 15 de septiembre de 2017 y RDP042481 del 14 de noviembre de 2017 mediante las cuales fue negada la reliquidación de la pensión de vejez de la demandante. Como restablecimiento del derecho solicitó reliquidar la pensión de vejez con el 75% de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.

¹ Ver folios 41-43

² Ver folios 29-30

III. DE LA PROVIDENCIA APELADA

Con la contestación de la demanda la UGPP solicitó que se vinculara en calidad de llamado en garantía al Ministerio de Transporte – Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil de Colombia, como quiera que esta fue la entidad empleadora de la demandante.

Mediante auto interlocutorio nro. 532 del 15 de julio de 2019, la *a quo* negó el llamamiento en garantía solicitado por el Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP, por considerar que no existe una relación de garantía legal o contractual entre la UGPP y el Departamento Administrativo Aeronáutica Civil.

IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte demandada UGPP, interpone recurso de apelación³ contra el auto interlocutorio nro. 532 del 15 de julio de 2019, aduciendo que la entidad que representa no está obligada a reliquidar ni reconocer prestaciones con fundamento en factores salariales de los cuales no se realizaron aportes, pues en estas decisiones no interviene la voluntad de dicha entidad, por lo que se hace necesario vincular al Departamento Administrativo Aeronáutica Civil en calidad de ex empleador de la demandante.

V. CONSIDERACIONES

5.1. EXPEDICIÓN DE LA PROVIDENCIA

Se trae a consideración las siguientes normas de la Ley 2080 de 2021:

“Artículo 20. *Modifíquese el artículo 125 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:*

Artículo 125. De la expedición de providencias. La expedición de las providencias judiciales se sujetará a las siguientes reglas:

1. Corresponderá a los jueces proferir los autos y las sentencias.

2. Las salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias y las siguientes providencias:

...

g) Las enunciadas en los numerales 1 a 3 y 6 del artículo 243 cuando se profieran en primera instancia o decidan el recurso de apelación contra estas;

...

³ Ver folios 29-30

3. Será competencia del magistrado ponente dictar las demás providencias interlocutorias y de sustanciación en el curso de cualquier instancia, incluida la que resuelva el recurso de queja.”

“Artículo 62. *Modifíquese el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:*

Artículo 243. Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia:

...

6. El que niegue la intervención de terceros.

...”

De acuerdo a lo anterior, la presente providencia debe ser proferida por la Sala de Decisión.

5.2. EL PROBLEMA JURÍDICO

La controversia jurídica planteada se resuelve respondiendo al siguiente interrogante:

¿Es procedente vincular en el proceso de la referencia al ex empleador del demandante, es decir, a la Departamento Administrativo Aeronáutica Civil, en calidad de llamado en garantía, teniendo en cuenta que lo pretendido en la demanda es la reliquidación de la pensión del actor con base a en todo lo devengado en el último año de servicio?

Para tal efecto, se analizará en primer orden: **i)** procedencia del llamamiento en garantía cuando se solicita la vinculación del empleador por incumplimiento en el pago de aportes al Sistema General de Pensiones y **ii)** luego se resolverá el caso en concreto.

5.3. EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

El llamamiento en garantía es una figura procesal que se fundamenta en la existencia de un derecho legal o contractual, que vincula al llamante y llamado y permite traer a éste como tercero, para que haga parte de un proceso, con el propósito de exigirle la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir el llamante, producto de la sentencia.

Se trata de una relación de carácter sustancial que vincula al tercero citado con la parte principal que lo cita y según la cual aquél debe responder por la obligación que surja en virtud de una eventual condena en contra del llamante. El objeto del llamamiento en garantía es:

“(...) que el tercero llamado en garantía se convierta en parte del proceso, a fin de que haga valer dentro del mismo proceso su defensa acerca de las

relaciones legales o contractuales que lo obligan a indemnizar o a rembolsar, y al igual del denunciado en el pleito, acude no solamente para auxiliar al denunciante, sino para defenderse de la obligación legal de saneamiento.”⁴

El llamamiento en garantía en materia contenciosa administrativa está regulado en norma especial, bajo los supuestos del artículo 225 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), que expresamente dice:

“Artículo 225. Llamamiento en garantía. Quien afirme tener derecho legal o contractual de exigir a un tercero la reparación integral del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquel, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación.

El llamado, dentro del término de que disponga para responder el llamamiento que será de quince (15) días, podrá, a su vez, pedir la citación de un tercero en la misma forma que el demandante o el demandado.

El escrito de llamamiento deberá contener los siguientes requisitos:

- 1. El nombre del llamado y el de su representante si aquel no puede comparecer por sí al proceso.*
- 2. La indicación del domicilio del llamado, o en su defecto, de su residencia, y la de su habitación u oficina y los de su representante, según fuere el caso, o la manifestación de que se ignoran, lo último bajo juramento, que se entiende prestado por la sola presentación del escrito.*
- 3. Los hechos en que se basa el llamamiento y los fundamentos de derecho que se invoquen.*
- 4. La dirección de la oficina o habitación donde quien hace el llamamiento y su apoderado recibirán notificaciones personales.*

El llamamiento en garantía con fines de repetición se regirá por las normas de la Ley 678 de 2001 o por aquellas que la reformen o adicionen.”

De igual forma, lo que no se encuentre regulado en el CPACA sobre la intervención de terceros, por expresa remisión del artículo 227 ibidem, se debe aplicar las normas del hoy vigente, Código General del Proceso (CGP).

Verificada la competencia de esta Corporación para resolver el recurso de alzada contra el Auto que se negó la solicitud de llamamiento en garantía, se procede a abordar el análisis del fondo del presente asunto.

⁴ MORALES MOLINA, Hernando. Curso de Derecho Procesal Civil. Editorial ABC, undécima edición, pág. 258. Bogotá. 1991.

Frente al llamamiento en garantía el Consejo de Estado en providencia del 19 de septiembre de 2019⁵, señaló:

“12. Al respecto esta sección⁶ ha sostenido que «para que proceda la intervención de un tercero en calidad de garante, debe existir una relación en la que se evidencie que el llamado en garantía está obligado a resarcir un daño, pues de lo contrario, la vinculación del mismo no tendría un fundamento legal para responder». No obstante, se advierte que sí el juez señala que del llamamiento en garantía no se desprende una relación sustancial entre aquel que pretende llamar y el llamado, el funcionario deberá negar el llamamiento por improcedente.

13. Ahora bien, en cuanto a la procedencia del llamamiento en garantía cuando se solicita la vinculación del empleador por el incumplimiento del pago de los aportes al Sistema General de Pensiones, se debe tener en cuenta que el empleador está en la obligación de realizar los pagos de los mismos al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, conforme lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley 100 de 1993⁷ que establece «el empleador responderá por la totalidad del aporte aun en el evento de que no hubiere efectuado el descuento al trabajador⁸».

14. No obstante ello y bajo la circunstancia del incumplimiento de la obligación aludida, las entidades administradoras de pensiones podrán hacer efectivo el cobro de los aportes de cotización pensional que corresponda a los empleadores mediante la acción coactivo que preceptúa el artículo 24 de la Ley 100 de 1993:

«Artículo 24. Acciones de cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito ejecutivo».

15. En suma, lo antedicho implica que aquellos casos en que los aportes no sean efectuados por el empleador, la obligación de hacer efectivo el pago de los mismos recae sobre las entidades administradoras de pensiones, quienes deberán impetrar las acciones de cobro a que hubiere lugar y hacer efectiva la ejecución de la liquidación que determine el valor adeudado, pues como lo señala la norma, presta mérito ejecutivo.

16. Así las cosas, no es procedente el llamamiento en garantía que haga la entidad encargada del reconocimiento prestacional a quien tiene la obligación

⁵ CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B. Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ. Auto del 19 de septiembre de 2019. Radicación número: 15001-23-33-000-2017-00899-01(2541-19)

⁶ Consejo de Estado, Sección segunda – Subsección B. Consejero Ponente: Cesar Palomino Cortés. Auto de fecha 22 de octubre de 2018, número de radicado: 05001-23-33-000-2014-00709-01(4593-15); auto del 16 de mayo de 2019 dentro del proceso con radicado No 25000-23-42-000-2016-01294-01(6477-2018), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

⁷ «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones».

⁸ Consejo de Estado, subsección B de la sección segunda, auto de fecha 21 de febrero de 2019, proferido dentro del proceso con radicado No 17001-23-33-000-2016-00236-01(1648-2018), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

de realizar el pago de los aportes al Sistema General de Pensiones, pues entre una y otra no existe una relación legal o contractual para solicitar su vinculación. Tal postura ha sido pacífica al interior de esta sección⁹ en los casos en donde se solicita por parte de la administradora de pensiones el llamamiento en garantía de aquel empleador que no había efectuado el pago de los aportes sobre los cuales se ordenaría la reliquidación de la pensión, como el estudiado en el sub lite, pues se indicó que esta figura procedía cuando entre el llamado y el llamante existiera una relación de garantía de orden real o personal de la que surge la obligación de resarcir un perjuicio o de efectuar un pago que pudiera ser impuesto en la sentencia que decida el respectivo proceso, razón por la que se negaba la solicitud.”

5.4. CASO CONCRETO

De conformidad con el artículo 328¹⁰ del C.G.P, aplicable por remisión expresa del artículo 306¹¹ del CPACA, se procederá a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte demandante, pronunciándose solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso interpuesto.

Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 172 del CAPCA¹², la solicitud de llamamiento en garantía de la referencia se radicó dentro del término de contestación de la demanda, esto es, dentro de la oportunidad legal.

Revisado el expediente, se tiene que la demandante pretende que se ordene a la UGPP la reliquidación de la pensión de vejez con base en el 75% del promedio del salario percibido en el último año, incluyendo todos los factores salariales devengados, de manera que, la discusión gira en torno a determinar si procede la reliquidación pensional con inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio. Asunto sobre el cual no tiene injerencia el Departamento Administrativo Aeronáutica Civil, en su calidad de ex empleador del demandante.

⁹ Consejo de Estado, auto de 5 de febrero de 2015, radicado 15001-23-33-000-2012-00120-01(2355-13), C. P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve; auto del 4 de julio de 2018, radicado 17001233300020160076401(3513-2017), .P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; auto de fecha 21 de febrero de 2019, radicado 17001-23-33-000-2016-00236-01(1648-2018), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez

¹⁰ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.

¹¹ ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

¹² Norma relativa al traslado de la demanda.

La parte demandada UGPP sostiene como argumento para llamar en garantía al Departamento Administrativo Aeronáutica Civil, que la reliquidación pensional no podría fundamentarse sobre aportes que no realizó el ex empleador al sistema de seguridad social en pensión, lo cual conlleva a determinar la improcedencia de la solicitud del llamamiento.

Así las cosas, de los argumentos expuestos en el escrito del llamamiento en garantía y en el recurso de apelación, no se pueden determinar la existencia de un vínculo legal o contractual que justifique la vinculación del Departamento Administrativo Aeronáutica Civil en calidad de llamado.

Además, en el evento de acceder a las pretensiones de la demanda, la consecuencia derivada de ella estaría en cabeza de la administradora de pensiones y no en cabeza del ex empleador de la señora Merceditas Mejía Restrepo.

Al respecto, el Consejo de Estado en pronunciamiento reciente, precisó¹³:

“(...) Debe señalarse entonces que es a la administradora de pensiones a la que le corresponde realizar en debida forma el reconocimiento de la pensión y proceder a reliquidarla, si a ello hubiere lugar, y que se encuentra a cargo empleador realizar los portes durante el lapso laborado por el trabajador.

Bajo esta perspectiva, ante una eventual condena desfavorable, la UGPP es la obligada a responder por la reliquidación pretendida por el accionante e incluso podrá descontar de la nueva liquidación pensional los aportes correspondientes a los factores salariales cuya inclusión se ordene, circunstancia que desvirtúa presunta relación lega o contractual con la entidad llamada en garantía, para que sea vinculada al proceso como extremo pasivo de la Litis.

Por lo anterior, si bien el empleador tiene la obligación de realizar el pago de los aportes que le corresponda, causados durante la relación laboral, no significa que sea necesaria su comparecencia a este proceso para que responda por las consecuencias que se deriven de una eventual condena, puesto que en caso de presentarse incumplimiento de sus obligaciones, la UGPP está facultada para iniciar las respectivas acciones legales, razón por la cual se confirmará la providencia recurrida, que negó el llamamiento en garantía deprecado.” (Subraya fuera del texto)

Ahora bien, en un asunto de iguales connotaciones al aquí debatido, el Consejo de Estado precisó¹⁴ que “no es procedente llamar en garantía a la Registraduría Nacional del Estado Civil porque no existe una norma que establezca el vínculo legal entre ella y la UGPP para responder por la

¹³ CONSEJO DE ESTADO, Sección Segunda – Subsección B. Consejero Ponente: CARMELO PERDOMO CUETER. providencia del 8 de abril de 2019Radicación No. 25000-23-42-000-2015-02600-01 (3469-16).

¹⁴ CONSEJO DE ESTADO, Sección Segunda – Subsección A. Consejero Ponente: RAFAEL FRANCISCO SUAREZ VARGAS. providencia del 8 de abril de 2019Radicación No. 19001-23-33-000-2015-00414-01 (2351-16).

reliquidación pensional derivada de una eventual condena judicial, pues, de requerirse el pago de las cotizaciones dejadas de realizar por la entidad llamada, en su condición de empleadora, la administradora de pensiones debe ejercer las acciones de cobro coactivo que la Ley 100 de 1993 dispuso para tal fin”.

En este orden de ideas y acogiendo los argumentos expuestos en precedencia, no puede predicarse la existencia de un vínculo legal para llamar en garantía al Departamento Administrativo Aeronáutica Civil, para responder por las consecuencias del fallo que se pueda dictar en este proceso en contra de la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP, pues si bien el empleador tiene la obligación de realizar el pago de los aportes respectivos, las entidades administradoras de pensiones, tienen el deber de realizar en debida forma la liquidación de las pensiones, su reconocimiento y el pago de las sumas derivadas de las liquidaciones que efectúen, conforme al régimen pensional aplicable a cada trabajador.

Por lo anterior, al tratarse el presente asunto de una reliquidación pensional, es claro que la responsabilidad recae en cabeza de la administradora de pensiones que para este caso es la UGPP, quien a su vez cuenta con la posibilidad de ordenar los descuentos por concepto de aportes no efectuados o iniciar los trámites a que haya lugar como el cobro coactivo de qué trata el artículo 24 de la Ley 100 de 1993.

Así las cosas, el Despacho confirmará el auto interlocutorio nro. 827 del 25 de octubre de 2018, mediante el cual el Juzgado 17 Administrativo Oral de Cali negó el llamamiento en garantía formulado por la UGPP.

En consecuencia, se;

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el Auto Interlocutorio nro. 532 del 15 de julio de 2019, mediante el cual el Juzgado 08 Administrativo Oral de Cali negó el llamamiento en garantía formulado por la UGPP.

SEGUNDO: Ordenase la devolución del expediente al despacho de origen dejándose en el sistema judicial las anotaciones de rigor.¹⁵

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Providencia discutida y aprobada en Sala Virtual de la fecha, según consta en acta que se entrega a la Secretaría de la Corporación por medios virtuales,

¹⁵ VoBo Secretario
Nathali Guarín

atendiendo las circunstancias de salubridad pública que se presentan en el país a raíz del COVID-19 y suscrito electrónicamente en la plataforma <http://samairj.consejodeestado.gov.co> en donde se puede corroborar su autenticidad.

Los magistrados,



ZORANNY CASTILLO OTALORA
Magistrada
CON SALVAMENTO DE VOTO



GUILLERMO POVEDA PERDOMO
Magistrado



VICTOR ADOLFO HERNÁNDEZ DÍAZ
Magistrado



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL VALLE DEL CAUCA
RAMA JUDICIAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA**





**TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
VALLE DEL CAUCA**

MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
EXPEDIENTE:	76001-33-33-008-2017-00329-01
DEMANDANTE:	NOHORA BARRERA MORALES alfortiz@cablenet.co
DEMANDADO:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES – UGPP notificacionesjudicialesugpp@ugpp.gov.co vhhbprocesoscali@gmail.com
ASUNTO	SALVAMENTO DE VOTO
PONENTE:	VICTOR ADOLFO DIAZ HERNANDEZ

Con el respeto acostumbrado por las decisiones mayoritarias de la Sala, en el presente asunto debo salvar mi voto pues considero que el llamamiento deprecado tiene como fin que al interior del proceso se establezca la responsabilidad directa o indirecta del empleador Unidad Administrativa de la Aeronáutica Civil de Colombia, con fundamento en el deber legal que a éste en tal calidad le asiste frente a los aportes de su trabajador, argumento que en mi criterio torna viable el llamamiento.

En efecto el artículo 225 CPACA señala que “Quien afirme tener derecho legal o contractual de exigir a un tercero la reparación integral del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquel, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación”.

Frente a la naturaleza y finalidad de la citada figura el H. Consejo de Estado en auto de fecha 09 de junio de 2015, radicado interno No. 53062, con ponencia de la Consejera Stella Conto Díaz del Castillo señaló:

“El llamamiento en garantía ha sido instituido, en aras del principio de economía procesal, pues da lugar a que en un mismo juicio se resuelva, además, de la controversia principal, el llamado derecho de “reversión”. Dicha figura procesal requiere como elemento esencial que, por razón de la ley o el contrato, el llamado deba asumir las contingencias o el resultado de una litis que le resulta ajena, salvo en que bien podría resultar comprometido a responder por el daño causado.

(...)

Como se conoce la figura del llamamiento en garantía es aplicable a ciertos medios de control, para el efecto aquellos en los que se busca una reparación o restablecimiento. (...) El llamamiento en garantía implica una nueva pretensión y una eventual incertidumbre en el resultado del proceso”. –Subraya de la Sala-

En la medida en que lo pretendido por la parte demandada es que la Aeronautica responda por la ausencia de pago de aportes en los que no tuvo en cuenta todos los factores salariales devengados por el demandante, se considera que la misma guarda clara armonía con la naturaleza del llamamiento en garantía, pues frente a la reclamación de la parte demandante existe una relación legal entre los empleadores y las administradoras de pensiones para hacer efectivos los reconocimientos prestacionales de los trabajadores y por su parte, entre ellas, la asunción de sus obligaciones (aportes, cuotas partes pensionales, bonos pensionales, etc); que también garantiza la estabilidad financiera del sistema de seguridad social en pensiones.

Si bien es cierto el H. Consejo de Estado en posición mayoritaria no acepta la procedencia de la figura, considero que tal interpretación desconoce principios que informan el procedimiento administrativo (Concentración y Economía Procesal) así como el de seguridad social en pensión (Garantía del sistema de seguridad social), so pretexto de la inexistencia de una relación de garantía real entre el llamante y el llamado que como viene de verse existe, pues es el empleador¹ quien garantiza tanto a la UGPP como al demandante el pago de los factores reconocidos y en consecuencia los aportes a pensión sobre ellos, sin desmedro del Sistema.

Desde la Ley 90 de 1946, se instituyó en Colombia el seguro social obligatorio para todos los individuos, nacionales y extranjeros, que prestaran sus servicios a otra persona en virtud de un contrato expreso o presunto de trabajo o aprendizaje y creó para su manejo el Instituto Colombiano de Seguros Sociales.

¹ Recaía desde la ley 6ª de 1945 sobre él la carga de efectuar la provisión de fondos correspondiente para ser trasladados al ISS cuando este asumiera la cobertura del componente pensional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la ley 90 de 1946.


Este mandato consagró en Colombia un sistema de subrogación de riesgos de origen legal, previsto en el artículo 72 de dicha ley, estableciendo una implementación gradual y progresiva del sistema de seguro social, proponiendo el desmonte de la carga pensional patronal para asumirla el Estado, bajo una condición de contribución y administración tripartita.

Así lo sostuvo la H. Corte Constitucional en Sentencia T-784/10 agregando que *“El sistema de financiación del fondo común para el pago de las pensiones de jubilación fue modificado mediante los decretos 433 de 1971 y 1935 de 1973, por medio de los cuales se exoneró al Estado de los aportes para la financiación de los seguros pensionales, abandonando así el sistema tripartito y radicando únicamente las cotizaciones en cabeza del trabajador y el patrono.”*; de lo que se rescata que existe una relación empleador-empleado y a su vez empleador-sistema de administración de la seguridad social, para el correcto funcionamiento del sistema pensional, que sustenta en todo caso la comparecencia del empleador como nexo o nódulo para la realización del derecho a la garantía de la seguridad social que es por definición principio mínimo laboral de acuerdo con el artículo 53 de la Constitución.

Por lo anterior, considero que debió revocarse la decisión primigenia para en su lugar aceptar el llamamiento, pues se verifica el cumplimiento de los requisitos para su procedencia conforme lo normado en el artículo 225 CPACA.

En esos términos dejo a salvo mi voto.

Cordialmente,



ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Magistrada

Fecha et supra